

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que don Mauricio Saldías Espinoza, abogado, en representación de la demandante doña Mariela Campos Saldaña, recurre de queja en contra de los integrantes de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministros señores Marcos Kusanovic Antinopal y Jaime Álvarez Astete, y fiscal señor Pablo Miño Barrera, por las faltas o abusos graves cometidos en la resolución de cinco de octubre del año en curso, recaída en los autos Rit T-55-2020, caratulados "Campos con Servicio de Salud Magallanes", del Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad, en cuya virtud rechazaron la reposición que se dedujo en contra de la resolución que desestimó la solicitud de suspensión de la vista de la causa y que declaró abandonado el recurso de nulidad laboral.

Señala que los recurridos incurrieron en grave falta o abuso al fallar en contravención formal al artículo 9 de la Ley N° 21.226, atendido que sólo fija como estándar de procedencia de la solicitud de suspensión de la vista de la causa alegar cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria ocasionadas por el COVID, resultando ser un hecho público y notorio que cualquier impedimento, asociado con la pandemia, no excluye la sobrecarga del sistema de redes y conexiones de todo el país. Además, sostiene que la resolución carece de razonabilidad si se considera su tenor literal, esto es, que fundamentó alegando que la vista se haría por video conferencia y no en forma presencial. En otro orden de consideraciones indica que la resolución que motiva la queja fue dictada por un integrante legalmente implicado, atendido que el fiscal señor Pablo Miño Barrera previamente declaró que le afectaba la inhabilidad prevista en el artículo 196 N° 15 del Código Orgánico de Tribunales.

**Segundo:** Que informando los recurridos exponen que para desestimar la reposición se tuvo en consideración que la



situación de hecho invocada respecto de la solicitud de suspensión de la vista de la causa contenida en la Ley N° 21.226 no fue acreditada en lo relativo a los problemas de conectividad e inestabilidad de red a que aludía, sin aportar antecedente alguno que pudiese hacer variar lo resuelto. Sostienen, además, que desde el inicio de la pandemia la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha mantenido publicadas en la página del Poder Judicial las instrucciones para poder alegar por video conferencia, exigiendo, entre otros datos, número de teléfono como medio de contacto para atender problemas técnicos y de conexión. Señalan que el recurrente no se comunicó el día de la vista de la causa con el tribunal para hacer presente sus problemas, teniendo en consideración que el escrito de suspensión se presentó el día anterior al de la audiencia haciendo alusión a problemas de conectividad presentados esa tarde, es decir, no el día de la audiencia. En cuanto a la inhabilidad alegada indican que no se hizo valer en la oportunidad legal.

**Tercero:** Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el nombre de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de queja es menester que el tribunal haya dictado una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que autoriza aplicarle una sanción disciplinaria que debería imponerse si se lo acoge.



Por lo tanto, se puede concluir que no es un medio que permita refutar cualquier discrepancia jurídica o errores que un juez haya cometido en el ejercicio de la labor jurisdiccional.

Dicha postura es la que esta Corte ha adoptado de manera invariable, según consta, entre otras, en las sentencias dictadas en los autos número de Rol 10.243-11, 1701-2013 y 3924-2013 de 11 de enero de 2012, y de 23 de marzo y 28 de agosto, ambas de 2013, respectivamente.

**Quinto:** Que del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se aprecia lo siguiente:

a.- Por resolución de 27 de agosto de 2021 se declaró admisible el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Mauricio Saldías Espinoza, por la parte demandante, en contra de la sentencia definitiva dictada con el 29 de julio del año en curso, en causa T-55-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas. En la misma fecha se estampó la inhabilidad que el fiscal don Pablo Miño Barrera sostuvo que le afectaba al tenor de lo dispuesto en el artículo 196 N° 15 del Código Orgánico de Tribunales, ordenándose ponerla en conocimiento de las partes para los efectos de lo dispuesto en los artículos 121 y 125 del Código de Procedimiento Civil;

b.- Por presentación de 9 de septiembre de 2021, el abogado don Mauricio Saldías Espinoza, en representación de la recurrente, solicitó la suspensión de la vista de la causa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 21.226, señalando que *"Fundo esta presentación en problemas de conectividad e intermitencia de la red de internet, que durante el transcurso de la tarde, ha afectado a la zona residencial en la que me encuentro"*, sin acompañar ningún antecedente que acreditara tal alegación;

c.- Por resolución de 10 de septiembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas proveyó el escrito señalado en la letra que precede *"Teniendo presente que la vista de la causa se efectuará por videoconferencia y no de manera presencial y no apareciendo suficientemente justificada la*



*petición, no ha lugar". Por resolución de la misma fecha, el tribunal de alzada declaró abandonado el recurso de nulidad laboral atendido el mérito de la certificación que daba cuenta que el abogado de la parte recurrente no compareció a la audiencia;*

d.- Por presentación de 14 de septiembre de 2021, el abogado recurrente presentó reposición en contra de las resoluciones referidas en la letra precedente, alegando que debió haberse concedido la suspensión de la vista de la causa, y dando cuenta de la inhabilidad de uno de los integrantes que concurrieron a la decisión;

e.- Por certificación de 29 de septiembre de 2021 se dejó *"constancia que la resolución dictada respecto de la inhabilidad formulada por el fiscal judicial don Pablo Miño Barrera, fue notificada con fecha 27 de agosto del presente por estado diario. Asimismo, no se realizó presentación alguna de las partes al tenor de lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil";*

f.- Por resolución de 5 de octubre de 2021 los recurridos rechazaron la reposición referida en la letra que ante precede teniendo en consideración que *"la situación de hecho invocada por el recurrente, respecto a la solicitud de suspensión contenida en la ley N° 21.226, no ha sido acreditada en cuanto al impedimento -problemas de conectividad e inestabilidad de red- en que se basa, al no aportar antecedente alguno que pudiese hacer variar lo resuelto",* agregando que la causal de recusación estampada por el señor fiscal Pablo Miño Barrera no fue hecha valer en la oportunidad legal que correspondía.

**Sexto:** Que, inicialmente esta Corte interpretó el artículo 9 de la Ley N° 21.226, del modo expresado en la causa Rol N° 69.918-2020, en que se estimó que éste no exige que se deban "acreditar" los fundamentos de la solicitud cuando se invoca tal norma y que tampoco limita la cantidad de veces que se pueda efectuar idéntica petición. Sin embargo, tal declaración debe ser morigerada a la luz de la



prolongación de la situación de emergencia y la evolución que durante la misma han tenido las prácticas judiciales, en particular, en lo relativo a la celebración de audiencias y las vistas de las causas.

En efecto, cabe considerar que cuando la norma se promulgó, el 1° de abril de 2020, se habían decretado las primeras cuarentenas que dificultaban el desplazamiento de jueces y abogados hasta los tribunales donde debían practicarse las diligencias, y no estaba aún del todo claro la posibilidad fáctica y jurídica de celebrarlas por vía remota, con todos los resguardos que el debido proceso exige; no obstante la experiencia demostró que ello era posible, la tramitación vía remota se volvió la regla general y esta Corte ha emitido Actas mediante las cuales se han fijado ciertos parámetros mínimos a respetar en el contexto del teletrabajo.

Así, ha sido posible advertir que, pese al uso masivo del servicio de internet doméstico, las fallas son menos frecuentes de lo que se pensó y que de haberlas, en muchas ocasiones son generalizadas, lo que facilita la prueba de tal circunstancia. De este modo, el uso de la suspensión consagrada en la norma corría el riesgo de transformarse en una herramienta que permitiera dilaciones abusivas, puesto que nada obsta a que si las partes de común acuerdo quieren solicitar una suspensión durante un tiempo más o menos extenso lo hagan, pero no resulta acorde al derecho a la tutela judicial efectiva que una de ella, de manera unilateral, pueda paralizar indefinidamente la tramitación, lo que constituye una conducta tan abusiva como podría serlo el efectuar una audiencia o vista de una causa en rebeldía o frente a la incomparecencia de una parte que justificadamente no puede acceder debido a dificultades tecnológicas.

**Séptimo:** Que tales razonamientos deben llevar a encontrar un justo o prudente medio entre el derecho de quien, razonable y justificadamente, se ve impedido de comparecer a una audiencia celebrada por vía telemática, y el



de quien quiere arribar a una decisión jurisdiccional final, que ponga término a la controversia y le permita ejecutar una sentencia que lo favorece.

**Octavo:** Que, teniendo en consideración lo referido, especialmente que el recurrente no acompañó ningún antecedente que diera cuenta de los problemas de conectividad que alegó tener para alegar vía telemática el día de la vista de la audiencia, y que el inciso final del artículo 481 del Código del Trabajo sanciona con el abandono del recurso de nulidad la falta de comparecencia del recurrente, se concluye que los recurridos no incurrieron en grave falta o abuso al no dar lugar a la suspensión solicitada y declarar el abandono del recurso de nulidad, atendido que el abogado representante de la demandante no se presentó para efectuar alegatos.

**Noveno:** Que, por otra parte, en relación con la concurrencia de un integrante presuntamente inhabilitado en la dictación de las resoluciones que motivan este arbitrio, para desestimar la existencia de falta o abuso grave basta considerar que, no obstante haberse estampado en su oportunidad causal de recusación por el fiscal señor Miño, no fue hecha valer por la parte en la oportunidad procesal que correspondía al tenor de lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, como fue certificado en su oportunidad.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza el recurso de queja** interpuesto en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ministros señores Marcos Kusanovic Antinoal y Jaime Álvarez Astete, y fiscal señor Pablo Miño Barrera.

Regístrese, comuníquese y, hecho, archívese.

N° 79.922-21.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., ministro suplente señor Jorge Zepeda A, y las



Abogadas Integrantes señoras María Cristina Gajardo H., y Leonor Etcheberry C. No firman los ministros señor Blanco y señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios el primero y por estar con permiso la segunda. Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.



En Santiago, a siete de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

